



DÍA CON DÍA

Héctor
Aguilar
Camín

Los gobernadores y la seguridad

Me hace notar un gobernador amigo que durante la reunión de Alamos, Sonora, los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) firmaron también un acuerdo sobre seguridad, y no sólo sobre federalismo, como señalé en mi columna del lunes pasado ("Gobernadores", 29/9/08).

Le respondí lo que respondo ahora: que el acuerdo que decidieron difundir con planas pagadas en los periódicos fue el de federalismo, no el de seguridad.

Es verdad, sin embargo, que la Conago emitió en Alamos un pronunciamiento sobre el proyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que antier fue enviada por el Presidente al Congreso.

Los gobernadores del país y el jefe de Gobierno del DF refrendan en ese documento su "firme decisión de cerrar filas" con el presidente Calderón "en el esfuerzo de aglutinar toda la capacidad, el peso y el trabajo institucional de la República a favor de esa urgente e importante exigencia ciudadana". Ratifican después su "irrestricto apoyo" al Acuerdo Nacional de Seguridad firmado el 21 de agosto.

El único compromiso de acción que contiene el documento es interesante y uno se pregunta por qué es una promesa novedosa en vez de una realidad cotidiana. Se trata de "iniciar, a la brevedad, operativos conjuntos"

entre los estados.

La lista de los peros es más larga. Los gobernadores están de acuerdo en "la adopción de medidas urgentes" en materia de seguridad, "pero sin vulnerar las instituciones". Importaría saber de qué vulneración institucional se habla, aunque uno sospecha que el documento se refiere a las intervenciones de la fuerza pública federal para pasar a la báscula a policías y procuradurías locales.

Finalmente, los gobernadores dicen que enviarán observaciones a la Ley de Seguridad Pública del Presidente, es decir, que no le gusta como está. Y solicitan a la Cámara de Diputados que les aumente el presupuesto de seguridad en igual proporción al solicitado por el gobierno federal, que es, creo, de un 20 por ciento.

Concluyo del documento que lo que hay entre los gobernadores y la Federación es un forcejeo de fondo más que un acuerdo sin fisuras. Lo cual vuelve a ser una mala noticia porque se revela que no hay un frente verdaderamente común en la guerra contra el narco donde tiene que haberlo.

Mi impresión es que el gobierno federal y los gobiernos locales piensan en cosas distintas cuando hablan de aterrizar las políticas de seguridad pública y, sobre todo, cuando hablan de la guerra al crimen organizado en que está comprometido el gobierno federal. ■ M

hector.aguilarcamin@milenio.com

